**Bogotá D.C., 23 de julio de 2025**

Doctor

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Secretario General

Cámara de Representantes

Ciudad

**REF: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY**

En mi condición de integrante del Congreso de la República y en uso del derecho consagrado en el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, por su digno conducto me permito poner a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el siguiente proyecto de ley “*Por medio de la cual se modifica la Ley 1641 de 2013 y se implementan estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, y se dictan otras disposiciones*” **(GARANTÍAS Y DERECHOS HABITANTE DE CALLE)**

Cordialmente,

**MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ**Representante por Santander  
Cámara de Representantes  
Congreso de la República

**PROYECTO DE LEY Nº \_\_\_\_ 2025 CÁMARA**

*“Por medio de la cual se modifica la Ley 1641 de 2013 y se implementan estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, y se dictan otras disposiciones”*

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1°. Objeto**. La presente ley tiene por objeto realizar una actualización a la Ley 1641 de 2013 con el propósito de establecer los derechos y garantías de las personas en situación de habitabilidad de calle y en riesgo de situación de calle para lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social en el marco de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle.

**ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 5o de la Ley 1641 de 2013, el cual quedará así:**

**ARTÍCULO 5o. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA HABITANTES DE LA CALLE.** La política pública social para habitantes de la calle **estará** **fundamentada** en el respeto y la garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, **para ello se implementarán estrategias y servicios integrales que materialicen sus derechos y garantías contenidos en la ley, la promoción de la igualdad y la integración social, con respeto de la diversidad humana**, el enfoque diferencial por ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes y, de manera especial, en los principios de:

a) Dignidad Humana;

b) Autonomía Personal;

c) Participación Social;

d) Solidaridad;

e) Coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la Administración Pública.

**f) Remoción de los obstáculos que impiden la plena garantía y protección de sus derechos.**

PARÁGRAFO **PRIMERO.** Con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se priorizará la atención de niños, niñas y adolescentes en estado de indefensión y vulnerabilidad manifiesta para su oportuna y temprana rehabilitación e inserción en la sociedad, a través de su capacitación y posterior vinculación en el sistema productivo social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO. Todos los programas existentes sobre implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle deben ser mantenidos o integrados a los programas que resulten de la aplicación de esta ley. En ningún caso puede disminuirse el alcance de los programas que ya se están implementando.**

**ARTÍCULO 3°. DERECHO A LA DIGNIDAD PERSONAL E INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación tienen derecho al respeto de su dignidad humana y a la protección de su integridad física, física, psíquica y moral. El Estado, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, debe implementar acciones afirmativas y medidas efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación o estigmatización hacia la población habitante de calle, garantizando, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de su autodeterminación, el libre desarrollo de su personalidad y la protección de su subjetividad, conforme a los principios consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

**ARTÍCULO 4°. DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación tienen derecho al reconocimiento de su identidad personal, entendida como la individualización en la sociedad a través de un nombre propio, personalidad jurídica y nacionalidad. El Estado, en cumplimiento de sus deberes, adoptará acciones para facilitar el acceso gratuito y oportuno al trámite de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento, documentos necesarios para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, en concordancia con los principios de igualdad y no discriminación.

**ARTÍCULO 5°. DERECHO AL ACCESO Y AL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación se les garantizará el acceso y uso de los servicios, la infraestructura y los espacios públicos, sin que exista discriminación alguna por su condición de vulnerabilidad. Este derecho debe ser ejercido en condiciones de igualdad y trato digno, y no puede ser restringido a través de acciones organizadas o permanentes que impliquen su exclusión. El Gobierno Nacional, y las entidades territoriales se articularán para implementar políticas inclusivas que permitan a la población habitante de calle acceder a los servicios públicos, a la infraestructura y a los espacios públicos en condiciones de igualdad, dignidad y sin actos de discriminación.

El Estado deberá procurar evitar el uso coercitivo de la fuerza pública en relación con esta población, medida que será excepcional, adoptada únicamente después de haber agotado todas las instancias de diálogo, inclusión y acompañamiento psicosocial mediante acciones pedagógicas encaminadas a la superación de la situación de vulnerabilidad.

**ARTÍCULO 6°. DERECHO A LA SALUD.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación tienen el derecho a recibir atención en salud integral, incluyendo prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación. El Estado deberá dar garantías en salud incluyendo la faceta preventiva del derecho a la salud y debe protegerse en consonancia con los principios de igualdad y equidad mencionados en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y demás normas concordantes. Los servicios de salud deberán implementar enfoque diferencial que respondan a las necesidades específicas de la población habitante de calle, incluyendo atención en salud mental, y tratamiento para la dependencia y abuso de sustancias psicoactivas.

El Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de salud de esta población vulnerable, para ello en todo caso se adecuarán los trámites administrativos para la eliminación de barreras administrativas.

El Gobierno Nacional, y las entidades territoriales se articularán para establecer lugares destinados al alojamiento de los habitantes de calle que les permitan cumplir y beneficiarse del aislamiento y atención psicosocial, como medio adecuado e importante para garantizar la faceta preventiva del derecho a la salud.

PARÁGRAFO. Las entidades territoriales podrán solicitar a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), como administradora de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, la destinación de bienes objeto de extinción de dominio con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.

**ARTÍCULO 7°. DERECHO A LA INCLUSIÓN LABORAL Y EL TRABAJO DIGNO.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación tienen derecho a la inclusión laboral y al trabajo digno, por lo que se asegura el ejercicio efectivo de sus derechos, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de su vulnerabilidad. El Estado, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, reglamentará programas y acciones tendientes a garantizar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de la población habitante de calle.

**ARTÍCULO 8°. DERECHO AL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA.** Las personas habitantes de calle o en riesgo de encontrarse en dicha situación tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda adecuada y digna de carácter permanente. El Estado debe elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales para la población habitante de calle. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas y/o la única unidad en los proyectos con menos de 100 viviendas para la población habitante de calle.

**ARTÍCULO 9°. ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.** La Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales y/o distritales, instruirá, orientará y asesorará a los habitantes del territorio nacional en el ejercicio y defensa de los derechos y garantías de las personas en situación de habitabilidad de calle y en riesgo de situación de calle para lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. La Defensoría del Pueblo también promoverá y divulgará el contenido de la presente ley, en el marco de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle.

**ARTÍCULO 10°. VIGENCIA.** Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

*De la Honorable Representante,*

**MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ**Representante por Santander  
Cámara de Representantes  
Congreso de la República

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Proyecto de Ley N°  /2025 *“Por medio de la cual se modifica la Ley 1641 de 2013 y se implementan estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, y se dictan otras disposiciones”*

1. **OBJETO DE LA INICIATIVA**

La situación de habitabilidad de calle representa uno de los fenómenos sociales más complejos y desafiantes de las sociedades contemporáneas. En Colombia, la Ley 1641 de 2013 estableció las bases para la atención a esta población vulnerable, pero la evolución de las dinámicas sociales, económicas y urbanas ha evidenciado la necesidad de una actualización normativa que responda de manera más efectiva a las realidades actuales. Esta iniciativa legislativa constituye un paso fundamental hacia la consolidación de un marco jurídico que no solo reconozca los derechos fundamentales de las personas en situación de calle, sino que también establezca mecanismos concretos para su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

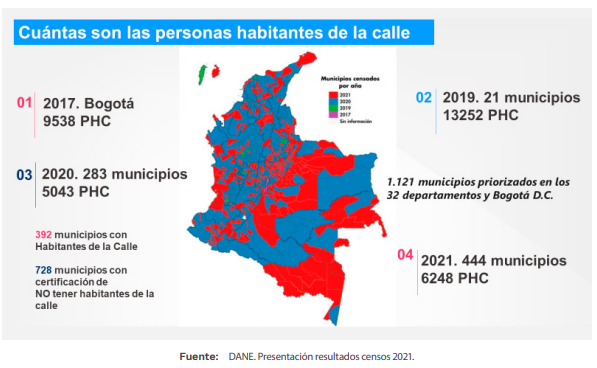
Un componente fundamental que se incluye en esta propuesta normativa es el reconocimiento explícito de la necesidad de remover los obstáculos que impiden la plena garantía y protección de los derechos de las personas en situación de habitabilidad de calle. Estos obstáculos, que pueden ser de naturaleza administrativa, social, económica, cultural o institucional, constituyen barreras sistemáticas que perpetúan la exclusión y dificultan el acceso efectivo a servicios y oportunidades.

Por otra parte, la inclusión específica de las personas "en riesgo de situación de calle" representa una innovación importante, este enfoque preventivo reconoce que la intervención temprana puede ser más efectiva y menos costosa que la atención posterior cuando la persona ya se encuentra en situación de calle. Esta categorización permite el desarrollo de programas específicos de prevención dirigidos a poblaciones vulnerables que, debido a sus condiciones socioeconómicas, familiares o de salud mental, presentan un alto riesgo de terminar habitando en la calle.

En este sentido, el proyecto de ley tiene por objeto realizar una actualización a la Ley 1641 de 2013 con el propósito de establecer los derechos y garantías de las personas en situación de habitabilidad de calle y en riesgo de situación de calle para lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social en el marco de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle.

**II. CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA A ABORDAR**

Según datos del DANE y la Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2022-2031 del Ministerio de Salud y Protección Social, el censo nacional de habitantes de calle se ejecutó durante cuatro períodos (2017, 2019, 2020 y 2021), aplicando 34.081 encuestas distribuidas así: 9.538 en 2017, 13.252 en 2019, 5.043 en 2020 y 6.248 en 2021. En términos demográficos, la población habitante de calle presenta una marcada diferencia por género: en promedio, el 87,4% corresponde a hombres y el 12,6% a mujeres a lo largo de los cuatro censos.

****

La proporción masculina alcanzó su máximo en 2017 (89,4%) y su mínimo en 2020 (84,7%), mientras que la participación femenina mostró el comportamiento inverso, con su máximo en 2020 (15,3%) y su mínimo en 2017 (10,6%). Respecto a la estructura etaria, los cuatro censos evidencian patrones similares: tanto hombres como mujeres se concentran principalmente entre los 25 y 39 años, con una edad mínima registrada de 14 años. No obstante, se observa consistentemente una mayor proporción de mujeres habitantes de calle en el rango de 15 a 24 años comparado con los hombres de esa misma edad. El análisis del inicio de la habitación en calle revela que la mayoría de las personas comienzan esta condición entre los 15 y 24 años.

En edades más tempranas (0 a 9 años), predominan los niños, pero esta tendencia se invierte en el grupo de 10 a 19 años, donde hay mayor presencia femenina. La población menor de edad representa en promedio el 2% de los habitantes de calle encuestados en los cuatro censos.

El registro más bajo se presentó en 2017 con 118 menores, y el más alto en 2019 con 194. Cabe destacar que únicamente en el censo de 2017 no se identificaron menores de 15 años. A pesar de la baja proporción de niños, niñas y adolescentes encontrados durante las encuestas, el 21,8% de las personas encuestadas en promedio reportó tener 18 años o menos al momento de iniciar su situación de calle. Esta proporción fue mayor en el censo de 2017 (24,9%) y menor en 2021 (19,7%).

En estudios adelantados por el Gobierno Nacional, con asesoría de la academía y la ciudadanía, se han identificado múltiples problemáticas que impactan tanto a la población habitante de calle como a los diferentes actores relacionados con esta situación, las cuales pueden agruparse de la siguiente manera:

* La ausencia de un lugar apropiado para habitar constituye una problemática fundamental. Asimismo, se presenta un proceso de marginación social que se manifiesta en el acceso restringido a servicios básicos como educación, atención médica, empleo, vivienda, nutrición adecuada y esparcimiento, además de las dificultades para acceder a oportunidades y hacer efectivos sus derechos fundamentales.
* La estigmatización y el rechazo social representan otro desafío significativo, ya que prevalece una imagen desfavorable hacia esta población. Esta percepción adversa persiste incluso cuando las personas logran superar su condición de calle y buscan integrarse social, económica y políticamente a la sociedad.
* Los obstáculos para obtener documentos de identificación constituyen una barrera adicional, al igual que el desconocimiento sobre sus garantías constitucionales y los procedimientos para acceder a los servicios a los que tienen derecho.
* La escasa integración en las estructuras de intercambio político, social y económico, junto con las dificultades para establecer y consolidar redes que favorezcan su bienestar, agrava su situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, el acceso limitado al sistema judicial representa una problemática crítica, considerando que esta población experimenta diferentes formas de violencia de manera sistemática sin poder acceder a los mecanismos de protección disponibles para cualquier ciudadano colombiano.
* La vulnerabilidad ante la instrumentalización por parte de organizaciones criminales para actividades ilícitas se debe a su alto nivel de exclusión social y a la debilidad o ausencia de redes de protección. Finalmente, se presenta una alta tensión en la convivencia con el resto de la comunidad debido a las dinámicas y costumbres propias de la vida en calle.

**III. JUSTIFICACIÓN**

El fenómeno de habitabilidad de calle es uno de los principales problemas que se puede encontrar en los grandes centros urbanos de Colombia. La sociedad ha elegido autoridades que han establecido modos de atención para este problema desde diferentes enfoques, modificando constantemente las estrategias y alterando así las condiciones de vida en la calle.

Se evidencia que el principal método que se debe emplear para aportar a la posible solución es la articulación en redes con entidades públicas y privadas, uniendo esfuerzos para el abordaje de este grupo poblacional en la construcción de nuevos conocimientos que den cuenta de la aplicabilidad para dar una solución efectiva. No obstante, esta solución no es fácil ya que se evidencia resistencia de las comunidades, barrios y de las mismas personas en condición de habitabilidad de calle para atender y comprender los ofrecimientos de las entidades encargadas de su atención.

El problema precisamente radica en cómo sensibilizar a la comunidad de que la situación de habitabilidad de calle está respaldada por la legislación y la garantía de sus derechos; adicional a esta premisa, la Ley 1641 de 2013 a nivel nacional propende “garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de la población habitante de calle, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social”, esto es, reinsertar y reducir el número de los habitantes de calle.

Existen varios factores generales para que una persona llegue a ser habitante de calle. Los factores predisponentes son los que generan desigualdad y exclusión, sobre todo a nivel social y económico.

Factores precipitantes: son los que hacen que una persona esté en mayor riesgo de habitar la calle, estos podrían ser:

* La pérdida de vivienda
* El abandono escolar
* Desempleo
* Trastornos mentales y por consumo de drogas
* Discapacidad
* Egreso de instituciones sin redes
* Falta de documentos de identidad
* Embarazo adolescente

El fenómeno de la habitabilidad de calle constituye una expresión compleja de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. Más allá de ser una problemática individual, representa un síntoma de las múltiples exclusiones sociales, económicas y políticas que experimentan sectores vulnerables de la población. **Su abordaje requiere, por tanto, de una perspectiva integral que trascienda las respuestas asistencialistas tradicionales y se articule desde un enfoque de derechos humanos.**

Esta propuesta normativa busca el reconocimiento de que la habitabilidad de calle no puede ser comprendida únicamente desde la carencia de vivienda, sino como un fenómeno multidimensional que involucra aspectos relacionados con la dignidad humana, la participación ciudadana, la eliminación de estigmas sociales y la construcción de redes institucionales efectivas. Esta estrategia busca generar cambios materiales a corto plazo, estableciendo las bases para transformaciones estructurales sostenibles en el tiempo.

El componente de esta estrategía se sustenta en el principio fundamental de que toda persona, independientemente de su situación de habitabilidad, posee derechos inalienables que deben ser garantizados por el Estado y la sociedad. Las condiciones de vida digna no se limitan únicamente al acceso a vivienda, sino que abarcan un conjunto integral de servicios y oportunidades que permiten el desarrollo pleno de las capacidades humanas.

Asimismo, las acciones orientadas a mitigar el deterioro progresivo de las condiciones de vida requieren de una comprensión profunda de los factores que perpetúan la exclusión social. Esto implica el desarrollo de servicios de atención primaria en salud que consideren las particularidades de la población habitante de calle, incluyendo problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades crónicas desatendidas y trastornos de salud mental.

La implementación de centros de atención integral debe contemplar no solo la provisión de servicios básicos como alimentación, aseo personal y descanso temporal, sino también espacios de acompañamiento psicosocial que permitan la reconstrucción de vínculos sociales y la elaboración de proyectos de vida alternativos. Estos centros deben operar bajo principios de flexibilidad y respeto a la autonomía individual, evitando la imposición de modelos únicos de "rehabilitación" que desconozcan las trayectorias particulares de cada persona.

La estrategia también debe incluir programas de reducción de daños que reconozcan las realidades del consumo de sustancias psicoactivas sin criminalizar estas prácticas, ofreciendo alternativas de atención que prioricen la preservación de la vida y la salud sobre enfoques punitivos que han demostrado su ineficacia.

Las barreras de acceso a condiciones de vida dignas no son meramente burocráticas, sino que reflejan estructuras discriminatorias profundamente arraigadas en nuestras instituciones e imaginarios sociales. Las acciones para la superación de estas barreras incluye la flexibilización de requisitos documentales, la eliminación de criterios de elegibilidad que perpetúan la exclusión y la capacitación del personal de atención en enfoques diferenciados que reconozcan las particularidades de esta población.

De este modo, se debe realizar una transformación cultural a través de acciones que deben incluir campañas de sensibilización que visibilicen las trayectorias de exclusión que conducen a la habitabilidad de calle, desmontando mitos y prejuicios que asocian esta condición con características personales deficitarias. Estas campañas deben privilegiar el testimonio directo de las personas afectadas, reconociendo su capacidad de agencia y su potencial contributivo a la sociedad.

La estrategia cultural también debe contemplar la formación de funcionarios públicos, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad y otros actores institucionales en enfoques de derechos humanos que permitan superar prácticas discriminatorias y violentas. Esta formación debe ir acompañada de mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen la efectiva implementación de nuevos protocolos de atención.

La complejidad del fenómeno de la habitabilidad de calle requiere de respuestas articuladas que trasciendan la fragmentación sectorial característica de la administración pública. La articulación interinstitucional no debe ser concebida meramente como un ejercicio de coordinación administrativa, sino como la construcción de una visión compartida sobre el fenómeno y las estrategias para su abordaje.

**Desafíos y Consideraciones para la Implementación**

*Sostenibilidad Financiera y Política*

La implementación efectiva de esta estrategia requiere de un compromiso sostenido en términos de recursos financieros y voluntad política. Los cambios materiales a corto plazo demandan inversiones significativas en infraestructura, personal especializado y programas de atención integral. Sin embargo, estas inversiones deben ser concebidas no como gastos sociales, sino como inversiones en desarrollo humano que generarán retornos económicos y sociales en el mediano y largo plazo.

*Monitoreo y Evaluación*

La estrategia debe contemplar sistemas robustos de monitoreo y evaluación que permitan documentar los avances, identificar obstáculos y realizar ajustes oportunos. Estos sistemas deben incluir tanto indicadores cuantitativos que den cuenta de la cobertura y calidad de los servicios, como indicadores cualitativos que capturen las transformaciones en las condiciones de vida y las percepciones de la población beneficiaria.

En conclusión, el abordaje del fenómeno de habitabilidad de calle a partir de esta inclusión normativa representa un cambio paradigmático que trasciende enfoques asistencialistas tradicionales para situarse en el marco de los derechos humanos y la justicia social, por medio de la articulación de atención para condiciones de vida digna, reducción de violencias y estigmas, y participación con articulación interinstitucional, desde el reconocimiento de la dignidad humana como eje orientador de la Política Pública Social para Habitante de Calle.

**IV. MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO**

El Artículo 13 de la Constitución Política, es obligación del Estado desarrollar acciones afirmativas en favor de los ciudadanos marginados atendiendo a sus especiales condiciones , que garanticen su protección en el marco de la igualdad y la solidaridad como pilares del ordenamiento colombiano, las que deben respetar el libre desarrollo de la personalidad, con las limitaciones que les imponen los derechos de los demás y el orden legal, tal como prevé el Artículo 16 Constitucional.

La ley 1641 de 2013 estableció los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

Y, entre el instrumento normativo más reciente se tiene el Decreto 1285 de 2022, que adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a la **Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2022-2031**, cuyo fin es garantizar la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de esta población, su atención integral, rehabilitación e inclusión social, así como disponer la formulación del Plan Nacional de Atención Integral a las Personas Habitantes de la Calle, como herramienta para la implementación, el monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política.

El marco normativo se fortalece con las decisiones judiciales y la jurisprudencia que sobre la atención al habitante de la calle ha emitido la Corte Constitucional, principalmente:

| ***Sentencia*** | ***Aspecto relevante*** |
| --- | --- |
| T- 376/1993 | Se indica que el término "desechable" es un calificativo impropio e indigno que ha venido tomando fuerza en medios sociales, en los que se ignora el valor de la dignidad humana y el imperativo constitucional de su respeto y prefiere el término indigente. |
| T- 384/1993 | Derecho a la asistencia pública en el caso de indigencia. |
| C-040/2006 | La mendicidad ejercida de manera autónoma y personal, sin intermediarios, no es delito ni contravención. |
| T-057/2011 | Acciones afirmativas para los habitantes de calle. |
| T-323/2011 | Especial protección a los habitantes de calle con VIH |
| C-385/2014 | Primacía de la igualdad en el tratamiento del habitante de calle. Declaró inexequible el término "que haya roto vínculos con familiares" |
| T-043/2015 | Toda persona, incluyendo al habitante de calle, es libre de desarrollar su personalidad acorde a su pluralidad. |
| T-092/2015 | El Estado debe proteger al habitante de calle |
| C-281/2017 | Declaró inexequible el parágrafo 3 del art. 41 de la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. No se podrán trasladar e internar a los habitantes de calle en contra de su voluntad. |
| T-389/2019 | Destacó la dignidad humana de la mujer en situación de habitanza de calle y gestión de su higiene menstrual. |
| C-062/2021 | Exceptúa a los habitantes de calle de las medidas correctivas ante la realización de necesidades fisiológicas en espacio público, y exhorta a las autoridades territoriales a que adopten acciones y políticas que garanticen a esta población el acceso universal a la infraestructura sanitaria. |

Asimismo, entre las principales normas internacionales consideradas, se encuentran la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José, Costa Rica), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A través de los mismos, los países firmantes, entre los cuales se encuentra Colombia, se comprometen a consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre, a reconocer que “las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana” señalando que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre de temor y miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Adicionalmente, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, que establece obligaciones del Estado para la protección de los niños y las niñas, la Resolución 49/212 de febrero de 1995 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce a los niños y niñas de la calle como sujetos que merecen atención, protección y asistencia especial, así como la Resolución 16 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2012, que expone la necesidad de un abordaje holístico para la protección de los derechos de los niños y niñas viviendo o trabajando en la calle, son normas internacionales referidas particularmente a la situación de las personas menores de edad.

Recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en el año 2015 por los países miembros de la ONU, establecen la necesidad mundial de adoptar medidas para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y fomentar la equidad, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

**V. CONFLICTOS DE INTERÉS**

El artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 que modificó el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 señala que: "el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto". Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar".

En observancia de lo dispuesto en la norma citada, me permito señalar que no me encuentro incursa en ninguna causal o actuación que pudiera generar conflicto de intereses con el trámite y aprobación de esta iniciativa. Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de interés en los H. Representantes a la Cámara para que puedan discutir y votar esta iniciativa de ley.

No obstante, podrian incurrir en conflicto de interés y deberán así declararlo, los congresistas que puedan obtener beneficios directos o actuales del presente proyecto y su aprobación en lo referente a la familias gestantes y las mujeres que actualmente se encuentren en situación de embarazo, trabajo de parto y posparto, o las demás disposiciones que se plantan en el articulado, así como su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

**VI. IMPACTO FISCAL**

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, establece, que “el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

En consecuencia, las iniciativas normativas que ordenen gasto u otorguen beneficios tributarios deben hacer explícito dicho gasto y la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado en su jurisprudencia –a manera de ejemplo se aprecia la Sentencia C-502 de 2007- que el Análisis del Impacto Fiscal de las Normas se trata de un criterio de racionalización de la actividad legislativa lo cual no puede suponer un veto sobre la misma.

El presente proyecto no genera beneficios tributarios adicionales, ni establece cargas impositivas a las entidades del orden nacional o territorial, y los gastos que genere esta iniciativa se entenderán incluidos y en el Plan Operativo de inversión de las entidades competentes.

*De la Honorable Representante,*

**MARY ANNE ANDREA PERDOMO GUTIÉRREZ**Representante por Santander  
Cámara de Representantes  
Congreso de la República

**BIBLIOGRAFÍA**

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Abecé Política Pública Social para Habitantes de Calle 2022-2031. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/abece-habitantes-calle-2022-2031.pdf>

Corte Constitucional de Colombia. (2015, 27 de febrero). Sentencia T-092 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-092-15.htm>

Presidencia de la República de Colombia. (2022, 22 de julio). Decreto 1285 de 2022. Por medio del cual se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a la Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2022-2031. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190506>